

# **RECONSTRUCCION HEGEMONICA Y CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR**

Graciela Cousinet

En la Argentina de hoy asistimos a un intento dificultoso de reconstrucción hegemónica por parte de una fracción de las clases dominantes, cuya singularidad es que se produce en medio de la crisis, tal vez definitiva, del Estado de Bienestar.

Para contribuir a una definición del concepto de hegemonía podemos decir que se construye en tres niveles:

a) En el plano simbólico-discursivo, donde la "dirección moral e intelectual" de una sociedad se disputa en torno al manejo del eje articulador de los contenidos ideológicos imperantes en la misma.

b) En el plano organizativo, donde las distintas fuerzas sociales se constituyen en su relación con el Estado peleando por mayores espacios de participación en su interior.

c) Y sobre todo, a partir de la capacidad de las clases fundamentales de actuar de modo no corporativo, integrando y articulando intereses diversos a los propios en un proyecto cuya dirección ejerzan. Es decir en su capacidad de constituir alianzas con otras clases, fracciones o sectores que les otorgue la conducción del proceso a través fundamentalmente del consenso.

En estos tres niveles se gesta en estos momentos la lucha por la hegemonía. Por primera vez en décadas las clases dominantes argentinas parecen obligadas a abandonar su comportamiento corporativo, debido al debilitamiento de otros sujetos o sectores que asumían la tarea de la articulación y cohesión social, para trabajar en la constitución de consenso e intentar un nuevo patrón de acumulación cuyos

beneficios puedan contribuir a la formación de alianzas con otras clases o fracciones de clase.

La crisis del proyecto hegemónico agroexportador producida en la década del treinta fue un hito que marcó las profundas dificultades de las clases dominantes para reconstruir su hegemonía. Diversos autores (Rouquié, Portantiero, Sábato, Schvarzer) coinciden en desterrar la imagen de clases propietarias divididas en sus intereses por tipos de actividades diferenciadas, según el esquema europeo clásico de desarrollo capitalista que enfrentaba a terratenientes e industriales, para proponer en cambio la existencia de un sector dominante homogéneo cuyo comportamiento se caracterizaría por una alta flexibilidad financiera, que les permitiría una gran ductilidad en el uso de las inversiones, unido al manejo de los resortes estales. Las contradicciones se darían más bien entre estratos de una misma fracción (por ejemplo: productores pequeños y medianos disputando ocasionalmente a la gran burguesía agraria) que entre fracciones de clase diferentes.

Este comportamiento les impide construir alianzas relativamente estables con otros sectores sociales y trabajar en la constitución del consenso. La década del treinta es el último intento de recomposición hegemónica viable, ya que el surgimiento del peronismo complejiza el escenario político con el incremento cuantitativo de la clase obrera, su organización y su poder de movilización. El Estado se transforma en el blanco y en el marco de las luchas intersectoriales.

La puja por la apropiación del ingreso se desplaza de los ámbitos clásicos de la pugna salarial, el mercado y el aumento de la productividad marginal del capital para trasladarse al campo de la movilización y la presión sobre el Estado. Este se constituye en intermediario de las negociaciones y en agente redistribuidor del excedente a través de los gastos sociales, fenómeno en curso en los países centrales y que aparece tempranamente en la Argentina con respecto al resto de los países latinoamericanos.

El vacío hegemónico dejado por las clases dominantes es resuelto desde el Estado a través de distintos mecanismos: incorporación de los sectores populares en las negociaciones, pactos intercorporativos y, cada vez con más fre-

cuencia, la presencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Estas debido a su relativa autonomía se presentan como las únicas capaces de agregar intereses fraccionales divergentes. Este fenómeno, que puede ser denominado "hegemonía burocrática de sustitución" (Rouquié, 1982), colapsa en el año 1982 con la derrota de Malvinas.

Es posible que la etapa alfonsinista sea vista con el tiempo sólo como un interregno de re-articulación donde se perfilaron estrategias y se redefinieron formas de intervención de los actores sociales.

El momento actual de recomposición hegemónica en curso tiene como eje central un replanteo radical de las relaciones entre Estado y sociedad. Si el Estado de Bienestar, como fenómeno internacional, se construye en el contexto de un proceso histórico donde los límites entre la sociedad civil y la política se hacen difusos y, en un mismo movimiento, la esfera de las decisiones políticas adquiere una relativa autonomía, "cuanto más se inserta el Estado en la sociedad civil tejiendo su trama privada, tanto más se autonomizan sus instancias decisional y de control de la dinámica social" (Marramao, 1983), en este momento de crisis y ruptura el desarrollo se invierte: el Estado se aleja de la sociedad civil y su autonomía se desdibuja en la medida en que sus vínculos con las clases dominantes están cada vez menos mediatizados.

El primer momento se explica por dos fenómenos convergentes: la presencia activa de las masas organizadas y la crisis económica que obligó a la intervención del Estado en nuevos campos. La reaparición de la crisis unida al retroceso de la movilización social son elementos que ayudan a entender la coyuntura actual. Como siempre la Argentina se inserta con características propias en una tendencia que es mundial.

El vacío de conducción producido en los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín encuentra a antiguos actores en condiciones de intervención muy disminuidas, como es el caso de los asalariados y las fuerzas armadas. Los primeros debido tanto a la disminución y dispersión de los establecimientos industriales, como a la transformación de la estructura productiva que deviene en ineficientes los meca-

nismos tradicionales de control de variables económicas y de redistribución del ingreso (Aspiazu y otros, 1987). Los segundos divididos y desgastados internamente, desprestigiados ante la opinión pública y considerados con recelo internacionalmente, si bien permanecen como garantía última del sistema, pierden capacidad de hacerse cargo del aparato de gobierno. A su vez el Estado considerado como un actor social soporta una crisis fiscal de tal magnitud que de persistir pondría en riesgo su función de síntesis y de cohesión social. Esto influye para que las clases dominantes consideren como prioritaria su reducción y saneamiento.

La crisis hiperinflacionaria de mayo de 1989 hace aparecer claramente el riesgo de la desintegración social. Ante esto un empresario declara: "No permaneceremos indiferentes ante el peligro de disolución social". Palabras ya escuchadas de boca de militantes en épocas previas a golpes de Estado. Lo novedoso es que esta vez no son ellos los portavoces. En un periódico capitalino aparece una solicitud firmada por numerosos grupos económicos nacionales y empresas transnacionales en la cual llamaban a la prudencia en cuanto a la remarcación de precios y aprobaban el plan económico del gobierno en sus objetivos principales de desregulación, privatización, incentivación de las exportaciones y recomposición del salario.

Un grupo importante de los sectores empresariales reacciona frente a la crisis de la cual no es ajeno pero cuya agudización los arrastraría.

Ideológicamente se trabaja para controlar el eje articulador del discurso social, entendiendo por articulación a "toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esta práctica" (Laclau, Mouffe, 1987).

En este caso el principio alrededor del cual se organizan los elementos ideológicos parece ser la eficacia del mercado como ámbito privilegiado de resolución de conflictos, acompañado de un intento sistemático de deshistorización.

Este es el campo en el que se resignifican elementos ideológicos de fuerte presencia en la sociedad tales como la

justicia social, la prioridad de atención a los más desprotegidos, la necesidad de eficacia en la utilización de recursos, la lucha contra la corrupción, la libertad y la modernización.

Actuando como barreras para otros discursos se utiliza el precepto de que escudriñar en el pasado demora la implementación de medidas de cambio. "Ahora hay que mirar hacia adelante", "No sigamos buscando culpables en el pasado", "Dejemos de echarnos culpas unos a otros". De la teoría de los dos demonios con la que se intentó justificar la represión de la dictadura militar pasamos a la de que todos somos inocentes. Si pudimos ser todos culpables confundidos en la misma sopa, también en un movimiento apenas perceptible podemos sentirnos todos absueltos.

A nivel organizacional se seleccionan las corporaciones que tendrán acceso directo en las negociaciones gubernamentales. Ingresan aquellas que han acordado previamente con las líneas generales del plan propuesto y se desplaza al resto.

El éxito de este proceso depende obviamente del comportamiento de las clases, sectores y organizaciones con posibilidad de incidencia. La persistencia de conductas funcionales a otras coyunturas, tanto por parte de las clases propietarias como asalariadas, dificultará o incluso impedirá la concreción de estos objetivos. Pero, sin duda, es en el sector empresario, debido al poder económico y político que ha acumulado a costa del de otros, donde recae en este momento la responsabilidad de modificar los patrones de acumulación vigentes que impiden todo proyecto viable de desarrollo.

Enfocando el problema desde otro ángulo resulta de crucial importancia preguntarse por las relaciones que se establecerán entre las clases subalternas y el Estado a partir de la drástica disminución de la redistribución a través de los gastos sociales, los que contribuían en una medida relevante a la reproducción de la fuerza de trabajo sin formar parte estrictamente del salario. La redistribución, en la forma de gastos sociales del Estado, más el salario compartían la tarea de reproducción de la fuerza de trabajo. En la medida en que la primera se retrae caben las siguientes posibilidades: disminuir los costos social y culturalmente aceptados como

necesarios para la reproducción, lo cual obviamente tiene un límite, aumentar la parte que le cabe al salario, o una combinación de ambas. Sin embargo esto rige sólo para aquellos que efectivamente tengan un salario, los que constituyen un sector que está en permanente retroceso.

Estas circunstancias hacen prever las siguientes consecuencias para la reconfiguración estatal:

1) La existencia de dos redes cada vez más diferenciadas entre sí: la sociedad central y la sociedad marginal, cada una de ellas con sus propias contradicciones internas y a la vez en contradicción entre sí. Si bien ambas forman parte de un único sistema de poder, se generan redes de dominación y exclusión heterogéneas, en las que el lugar del Estado también es distinto. En una representando la cúspide de la pirámide y en otra ejerciendo un control esporádico y difuso. Esto, a su vez, dificulta la posibilidad de un proyecto contrahegemónico que articule intereses de distintos sectores de las clases populares.

2) La lucha por el ingreso tenderá a su despolitización al desplazarse a una lucha económica por el salario, que sólo mediatizadamente es política. En cambio lo era directamente cuando el interpelado era el Estado en su papel mediador y redistribuidor. Esto se ve claramente en las luchas de los asalariados estatales, donde tanto la lucha por el aumento de salarios como por la preservación de las fuentes de trabajo deviene inmediatamente política.

Por el lado de los sectores marginales la escasa posibilidad de encontrar canales de escape genera una situación de gran conflictividad. A diferencia de otros países de América Latina en Argentina no hay naciones limítrofes o cercanas que puedan constituirse en polo de atracción de mano de obra desocupada como fue Argentina para sus vecinos, o Estados Unidos para América Central y el Caribe. Tampoco existe una economía paralela delincencial de la importancia de las que genera la producción y comercialización de drogas. El ejemplo de los movimientos hacia los supermercados en el mes de mayo de 1989 muestra que la revuelta no está dirigida directamente sobre el Estado y su contenido político tampoco es inmediato. Las movilizaciones adquieren la forma de una desobediencia civil organizada de manera novedosa,

donde lo que sorprende es justamente esta capacidad de organización poco previsible en estos sectores y la escasa o nula persistencia de núcleos organizativos a partir de estas experiencias. La posibilidad de acumulación de poder es muy débil. De todos modos una de las preguntas que debemos hacernos es si el desconocimiento del derecho de propiedad es en sí mismo político.

3) Otra consecuencia previsible es que el Estado pierda capacidad de regenerar el símbolo de ser representante del interés general con el que se recubre. Se produce una feudalización de éste en la medida en que su espacio es ocupado por representantes directos de los sectores empresarios.

A su vez reemplaza discursivamente la idea populista de los pactos sociales de conciliación de intereses por el reconocimiento de la inevitabilidad, por lo menos coyuntural, del conflicto. Su papel frente al mismo se transforma de intermediario en preventivo y disuasivo. Su máxima aspiración es lograr una tregua en la lucha.

Esto aparece como contradictorio, ya que si tomamos en cuenta que la burguesía "se pone a sí misma como un organismo en continuo movimiento, capaz de absorber toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico" (Gramsci), en este momento asume este rol al ligar el desarrollo de la sociedad a su propio desarrollo y fortalecimiento, pero a diferencia de otras etapas lo hace a partir de una reducción del Estado. Esto es importante para ser tenido en cuenta porque implica una reversión ideológica: la de no considerar más al Estado como el responsable de mantener condiciones mínimas de subsistencia. Al devolver estas tareas a la sociedad también queda más expuesta a ser objeto de demandas, aunque los portadores de éstas sólo puedan ser los asalariados privados.

4) El fenómeno de reconfiguración estatal en marcha es de una gran complejidad cuya inmediatez dificulta el análisis. Si Gramsci hablaba de sociedades complejas en las cuales el Estado se ampliaba ingresando en la sociedad civil y colocando trincheras que transformaban en parcial lo que antes eran movimientos totales en la toma del poder, acarrea para éste el costo de internalizar las contradiccio-

nes en su seno. Nuevamente un doble movimiento paradójico.

Actualmente observamos que el Estado se retira de vastos campos, cediendo algunos a la iniciativa privada y reduciendo la capacidad de otros, como es el caso de la educación pública, lo que permite hablar de una verdadera privatización de la reproducción.

A su vez al transformar al salario en el pivote de las pujas intersectoriales y al mercado en el mecanismo equilibrador de los conflictos tiende a desplazar las contradicciones de su interior y trasladarlas al ámbito de la sociedad civil.

En síntesis, mientras en relación con las clases populares el Estado se distancia de la vida cotidiana de estos sectores ampliando la brecha entre éste y la sociedad civil, en relación con las clases dominantes se desdibuja el límite entre lo público y lo privado.

Pero tal vez no se haya advertido que en caso de que la descomposición de la burguesía argentina sea tan profunda que le dificulte su actuación como hegemónica, es posible que el manejo directo de los aparatos de un Estado reducido no alcance para su reconstrucción, sino que sería necesario constituir un Estado dotado de relativa autonomía y alta capacidad de intervención para asumir esta tarea.

Se ha iniciado un proceso novedoso de reconstrucción hegemónica que como todos es tendencial y contradictorio, que nos obligará a repensar categorías y a inventar otras, a imaginar nuevas estrategias, pero sobre todo a darnos cuenta una vez más de que ninguna institución es natural y necesaria sino el resultado de una construcción social históricamente situada.

## Bibliografía

- ASPIAZU, D. y otros: *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*, Legasa, Buenos Aires, 1987.
- GRAMSCI, A.: *Cuadernos de la Cárcel*. (varias ediciones).
- LACLAU, E. y MOUFFE, CH.: *Hegemonía y estrategia socialista*, Siglo XXI, Madrid, 1987.
- MARRAMAQ, G.: *Sistema político, racionalización, "cerebro social"*, en: *Discutir el Estado*, Folios, Buenos Aires, 1983.
- PORTANTIERO, J.C. y MURMIS, M.: *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.
- ROUQUIE, A.: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 1983.
- \_\_\_\_\_: *Hegemonía militar, Estado y dominación social, en: Argentina hoy*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1982.
- SABATO, J. y SCHVARZER, J.: *Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina*, en: *Cómo renacen las democracias*, Emecé, Buenos Aires, 1985.